

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTE	JAIRO NELSON GARCÍA OSORIO
EJECUTADO	LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ
RADICADO	05001-31-05-018-2021-00302-01
TEMA	Apelación en contra del auto que niega mandamiento de pago
DECISIÓN	Revoca

Medellín, dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del presente proceso ejecutivo laboral, promovido por el señor **JAIRO NELSON GARCÍA OSORIO**, contra el señor **LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 046**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

El señor **JAIRO NELSON GARCÍA OSORIO** actuando a través de apoderada judicial, adelantó demanda ejecutiva laboral contra el señor **LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, solicitando la ejecución por los siguientes conceptos y sumas dinerarias:

1. Por concepto de capital, valor de VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$26'087.657,00)., correspondientes al valor dejado de cancelar por el señor RAMIREZ BOHORQUEZ por concepto de honorarios profesionales pactados a través de contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el doctor GARCÍA OSORIO, para la realización de reconocimiento de pensión de vejez, tramite adelantado bajo radicado 050013105021-2015-00163-01 que culminó con decisión judicial de segunda instancia favorable al ejecutado y acatada por la entidad COLPENSIONES mediante Resolución SUB 123390 de 25 de mayo de 2021.

2. Por los intereses moratorios del capital, causados a partir del 1 de julio de 2021 hasta la fecha de pago total de la obligación.

3. Ordénese imputar los pagos realizados, de conformidad con los artículos 1653, 2494 y siguientes del Código Civil, al pago de intereses moratorios y una vez finiquitados, al capital adeudado.

4. Condenar al ejecutado al pago de costas y agencias de derecho, debido al presente del proceso.

PETICIÓN SUBSIDIARIA:

En caso no proceder el reconocimiento de intereses moratorios pretendidos en la solicitud segunda del mandamiento ejecutivo, solicito respetuosamente se realice la indexación de las sumas de dinero reconocidas a título de capital.

Dichas pretensiones ejecutivas, se sustentaron, expresando que el señor **JAIRO NELSON GARCÍA OSORIO** en su calidad de abogado litigante y en representación del ejecutado **LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, promovió proceso ordinario laboral contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, el cual fue conocido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín bajo el radicado único

nacional 05001-31-05-021-2015-00163-00, tendiente al reconocimiento judicial de una pensión de vejez con régimen de transición pensional a cargo de la referida administradora pública de pensiones.

También se expuso que, para la tramitación del proceso ordinario laboral de la referencia, las partes celebraron un contrato de prestación de servicios, pactándose en su CLÁUSULA SÉPTIMA el pago de honorarios profesionales bajo la modalidad de cuota litis y/o cláusula de efectividad, donde se estipuló lo siguiente: *“HONORARIOS, la parte representada pagara al abogado el valor del 30% de los resultados del proceso. Se acuerdan las costas procesales en valor del 70% a favor del abogado.”*

Que el abogado Jairo Nelson García Osorio, en ejercicio de las facultades otorgadas en el mandato judicial, realizó todas las actuaciones procesales en primera y segunda instancia, logrando con su labor una decisión favorable para los intereses pensionales del ejecutado, y luego mediante auto del 21 de agosto de 2020, el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín liquidó costas procesales por valor de \$5'901.736, de las cuales el 30% le correspondieron al ejecutado y el restante 70% al abogado, conforme lo convenido en el contrato de prestación de servicios.

Que el ejecutante presentó cuenta de cobro ante COLPENSIONES respecto de las condenas impuestas al interior del proceso ordinario laboral, y ante el silencio de esta entidad, se vio obligado a instaurar una acción de tutela a favor del ejecutado, procurando el cumplimiento de estas sentencias, lo que derivó en la expedición del acto administrativo N° SUB-123390 del 25 de mayo de 2021, donde se ordenó el ingreso a nómina de pensionados y se dispuso el pago del retroactivo pensional e intereses moratorios, desembolsándose a favor del ejecutado la suma de \$599.104.261.

Que de la anterior suma dineraria, el ejecutado únicamente le canceló al ejecutante la suma de \$153.643.621, cuando en realidad la suma que debió ser

cancelada era de \$179.731.278, equivalente al 30% de las resultas del proceso según lo convenido en la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de prestación de servicios, quedando pendiente de cancelar una diferencia de \$26.087.657, por la cual deberá librarse el mandamiento de pago, al ser esta obligación, clara, expresa, y exigible, en los términos del art. 422 del Código General del Proceso.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:

En providencia del 14 de octubre de 2021 (archivo PDF N° 06 del expediente digital), la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín se pronunció frente a la demanda ejecutiva, resolviendo lo siguiente:

“...PRIMERO: RECHAZAR por falta de título ejecutivo que determine la exigibilidad de la obligación a cargo del señor LUIS FERNANDO RAMIREZ BOHORQUEZ a favor del Dr. JAIRO NELSON GARCIA OSORIO, la presente demanda ejecutiva laboral.

SEGUNDO: Autorícese la devolución de las piezas procesales, disponiéndose el archivo de las diligencias previa finalización en el Sistema de Gestión Siglo XXI...”

El argumento central que motivó la A quo para dicha resolución, consistió en que *“...En el presente asunto, el contrato de prestación de servicios no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 422 del Código General del Proceso, par a ser tenido en cuenta como un título ejecutivo, toda vez que en primera medida el objeto del mismo, con las cláusulas que la rigen no guardan concordancia, pues una cosa es reclamar administrativamente un derecho y otra muy distinta es el de representar a la parte vía judicial; de otro lado se verifica que en él no se expresa una obligación clara, pues si bien es cierto que en dicho contrato se pactaron como honorarios profesionales el 30% de las resultas del proceso y el 70% de las costas liquidadas, se presenta una ambigüedad en la determinación de la obligación, la cual deber ser clara y expresa, advertido que*

tal y como lo expresa el mismo demandante en los hechos de la demanda, su poderdante canceló una suma de dinero, como producto de su gestión, el cual considera es deficitaria, y por esa razón acude a la vía ejecutiva...”.

También señaló que de conformidad con el numeral 6° del art. 2° del CPTSS, los conflictos jurídicos que se originen en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive, deben ser tramitados bajo los lineamientos del proceso ordinario laboral declarativo.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Esta decisión fue recurrida en apelación por la apoderada judicial de la parte ejecutante (folios 2 al 9 del archivo PDF N° 7), quien solicitó su revocatoria, expresando su inconformismo con el auto interlocutorio de primera instancia que se abstuvo de librar mandamiento de pago en contra del señor LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, lo cual sustentó expresando que, contrario a lo colegido por la a quo, el contrato de prestación de servicios jurídicos suscrito entre las partes, si constituye un título ejecutivo susceptible de ser exigido coactivamente a través del proceso ejecutivo laboral, pues se trata de título ejecutivo complejo, donde son varios los documentos que lo conforman, y que proporcionan certeza sobre el valor de la obligación.

Señalando la recurrente que, con la presente acción judicial se aportaron los videos de las sentencias de primera y segunda instancia, la cuenta de cobro, el valor de la resolución con la liquidación emitida por Colpensiones, y el documento judicial que contiene la liquidación de costas y agencias en derecho, aclarando que éstas últimas no se está discutiendo como parte de la obligación dineraria del presente título.

Adujo que de los referidos documentos, se evidencia una obligación clara, expresa, y exigible, al encontrarse identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan, además en la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación, pues se dice de manera expresa que el valor a reconocer es el 30% de las resultados del proceso, siendo liquidable la obligación a favor del ejecutante, suma que también es exigible, pues su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, es una obligación pura y simple ya declarada.

Alegatos de conclusión

La apoderada judicial de la parte ejecutante, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, exponiendo básicamente que el contrato de prestación de servicios si presta mérito ejecutivo, y que en tal virtud debió haberse librado el mandamiento de pago solicitado, pues en el referido documento se dijo que el porcentaje a cancelar por valor de honorarios se derivaba del “30% de los resultados del proceso”, el resultado del proceso se demostró con la certificación de pensión donde se establece la suma total cancelada al señor Ramírez Bohórquez, producto de la gestión del doctor García Osorio, la cual está igualmente demostrado, por lo cual existe plena certeza a través de una operación aritmética de resta, del monto deficitario que serviría de fundamento para la ejecución.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La controversia jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a la apelación presentada a instancias de la parte ejecutante, sobre el auto interlocutorio a través del cual la *A Quo* se abstuvo de librar mandamiento de pago contra el señor LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, al estimar no satisfechos los requisitos que debe tener el título ejecutivo, providencia que en efecto es apelable, al tenor de lo dispuesto por el numeral 8° del artículo 65 del CPTSS.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, que un documento aducido como TÍTULO EJECUTIVO debe gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las **condiciones formales** consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Las **condiciones sustanciales** exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible.

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser **clara, expresa y exigible**.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*” (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero

Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

Y en esos precisos términos se encuentra redactado el concepto de TÍTULO EJECUTIVO, en nuestro estatuto procesal, el art. 422 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la Sala a establecer si el documento aportado por la parte ejecutante, denominado “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS”, visible en el archivo PDF N° 02 del expediente digital, goza de las condiciones formales y sustanciales para ser considerado un TÍTULO EJECUTIVO susceptible de ejecución forzada a través de un proceso ejecutivo laboral, veamos:

SEPTIMO: HONORARIOS, la Parte representada pagara al abogado el valor del 30% de los resultados del proceso. Se acuerdan las costas procesales en valor del 70% a favor del abogado.

OCTAVO: Todas y cada una de las cláusulas del presente contrato de servicios profesionales presta mérito ejecutivo para el pago de los honorarios pactados. El representado renuncia a los requerimientos para la constitución en mora y el sólo retardo se entenderá como incumplimiento contractual, autorizando al representante a cobrar por las vías ejecutivas.

En el referido contrato bilateral, las partes acordaron que todas y cada una de las DIEZ CLÁUSULAS estipuladas en el contrato de prestación de servicios prestaría mérito ejecutivo, destacándose entre ellas la CLÁUSULA SÉPTIMA relativa a “HONORARIOS” a favor del mandatario judicial, frente a la cual, la parte ejecutante asegura que el ejecutado apenas se allanó a un cumplimiento parcial, pues solo pagó el 70% de las costas procesales, y el 25,64% de las resueltas del proceso, a sabiendas que estas últimas se habían acordado en un 30% (\$179.731.278); también asegura que la referida cláusula, es clara, expresa, y actualmente exigible, y por ende susceptible de ejecución coactiva.

Argumentos que comparte la Sala, pues efectivamente la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de prestación de servicios, cuya ejecución coactiva se persigue, es lo suficientemente clara, es decir, existe plena certeza en cuanto a la obligación contraída por las partes, y más concretamente aquella que le correspondía al ejecutado LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, es decir, cancelarle a su apoderado judicial el 30% de las resultas del proceso.

Para lo cual no era necesario adelantar un proceso ordinario laboral declarativo, como lo consideró la juez de primer grado, todo lo contrario, y es que, no existe en el sub lite una controversia frente a la existencia de honorarios profesionales, pues estos están contenidos en un documento privado suscrito por las mismas partes, quienes determinaron con absoluta precisión como serían liquidados estos honorarios (30% de los resultados del proceso), y que parte los asumiría.

También está probado que el ejecutante fungió como apoderado judicial del ejecutado al interior de un proceso ordinario laboral, tramitado ante el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín, bajo el radicado único nacional 05001-31-05-021-2015-01693-01, y que este mismo apoderado judicial se encuentra reconocido como tal por COLPENSIONES, en el ARTÍCULO DECIMO de la parte resolutive del acto administrativo N° SUB-123390 del 25 de mayo de 2021, donde se dio cumplimiento a las sentencias judiciales, veamos:

ARTICULO DECIMO: Notifíquese Doctor **JAIR NELSON GARCÍA OSORIO**, haciéndole saber que contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 del C.P.A y de lo C.A.

Por lo tanto, era procedente librar el mandamiento de pago solicitado, pues las mismas partes precavieron cualquier eventual litigio respecto a los honorarios profesionales, al haberle dado mérito ejecutivo a todas y cada una de las cláusulas del contrato de prestación de servicios, y tampoco podía echarse de menos que la demanda ejecutiva laboral se acompañó de los demás documentos constitutivos del título ejecutivo complejo (sentencias de primera y segunda instancia, y resolución de cumplimiento proferida por Colpensiones), que analizados en conjunto, permiten establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, en los términos del art. 422 del CGP.

Así las cosas, se revocará el auto interlocutorio objeto de apelación de origen y fecha conocidos, y en su lugar, se ordenará a la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, a proferir el mandamiento de pago correspondiente acogiendo las pretensiones a las que haya lugar, pero advirtiéndole a la funcionaria judicial de primer grado, que el mandamiento de pago respecto a la pretensión primera (capital por la diferencia entre los honorarios pagados y los debidos de pagar), deberá tener como punto de partida lo realmente desembolsado por COLPENSIONES al ejecutado **LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, que fue la suma de **\$559.787.761**, y no la suma de \$599.104.261 como infundadamente lo afirma la parte ejecutante en el hecho DÉCIMO PRIMERO de la demanda ejecutiva

DÉCIMO PRIMERO: Según comprobante de nómina correspondiente al mes de junio de 2021, se evidencia el desembolso realizado por Colpensiones para dicha fecha el valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$599,104,261.00)**.

Pues de conformidad con la prueba documental aportada por la misma parte ejecutante, el ejecutado **LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**,

realmente recibió de la administradora pública de pensiones la suma de \$559.787.761, luego de haberle aplicado unas deducciones por valor de \$39.316.500, según consta en la certificación expedida por la GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS – DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS de COLPENSIONES, visible a folios 17 al 22 del archivo PDF N° 02 contenido en el expediente digital de primera instancia.

DEVENGADOS		DEDUCIDOS	
MESADA ADICIONAL RETROACTIVO	\$ 4,344,504.00		
MESADA ADICIONAL RETROACTIVO	\$ 4,344,504.00		
TOTAL DEVENGADOS	\$ 599,104,261.00	TOTAL DEDUCIDOS	\$ 39,316,500.00
		NETO GIRADO	\$ 559,787,761.00

Sin costas en esta instancia, al haber prosperado el recurso de apelación formulado, y la no existencia aún de una contraparte.

VI. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

R E S U E L V E:

Primero: REVOCAR el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 14 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, **ORDENAR** a la funcionaria judicial de primer grado a proferir el mandamiento de pago correspondiente, acogiendo las pretensiones a las que haya lugar, pero advirtiéndole, que el mandamiento de pago respecto a la pretensión primera (capital por la diferencia entre los honorarios pagados y los debidos de pagar), deberá tener como punto de partida lo realmente desembolsado al ejecutado LUIS FERNANDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, que fue la suma de \$559.787.761., según lo expuesto en precedencia.

Segundo: Sin costas en esta instancia.

Tercero: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 191 del 24 de octubre de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>